



BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

I LEGISLATURA

Serie A:
PROYECTOS DE LEY

3 de mayo de 1982

Núm. 169-I 3

INFORME DE LA PONENCIA

Proyecto de ley reguladora del Patrimonio Nacional.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del informe emitido por la Ponencia relativo al proyecto de Ley Reguladora del Patrimonio Nacional.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 1982.—El Presidente del Congreso de los Diputados, **Landelino Lavilla Alsina**.

A la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el proyecto de Ley Reguladora del Patrimonio Nacional, integrada por los Diputados don Juan Barranco Gallardo, don José Bono Martínez, don Salvador Clotas i Cierco, don Josep María Riera i Mercader, don José Luis Meilán Gil, don Al-

berto Estella Goytre, don Antonio Vázquez Guillén, don Llibert Cuatrecases i Membrado, don Gerardo Bujanda Sarasola, don Juan Luis de la Vallina Velarde y don Andrés Limón Jiménez, ha estudiado con todo detenimiento dicho proyecto, así como las enmiendas presentadas al mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento eleva a la Comisión el siguiente

INFORME

En relación con este proyecto de Ley Reguladora del Patrimonio Nacional han presentado enmiendas los Grupos Parlamentarios de la Minoría Catalana, Socialista del Congreso, Coalición Democrática y Grupo Parlamentario Comunista. A la vista de los razonamientos invocados en las citadas enmiendas, la Ponencia estima aconsejable someter a la consideración de la Comisión una reelaboración del texto del proyecto con arreglo a la redacción que se formula en el anexo al presente informe.

En el artículo 1.º se configura una Entidad de Derecho Público, con personalidad

jurídica y capacidad de obrar, orgánicamente dependiente de la Presidencia del Gobierno, cuyos fines son la gestión y administración de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional y cuyo régimen jurídico se precisa.

En el artículo 2.º se formula una calificación jurídica de los bienes del Patrimonio Nacional en función de los principios de titularidad del Estado y de uso y servicio de los mismos con la finalidad de alta representación que la Constitución y las leyes contemplan.

En el artículo 3.º, y de acuerdo con un criterio de compatibilidad con afectación de los bienes del Patrimonio Nacional, se destaca la posible adopción de medidas conducentes al uso de los mismos con fines culturales, científicos y docentes y la atención a la protección del ambiente y a las finalidades con ella relacionadas.

En relación con el artículo 4.º se precisa la formulación del texto de acuerdo con las tesis mantenidas en las enmiendas con objeto de delimitar los bienes incluidos dentro del ámbito del Patrimonio Nacional.

En el artículo 5.º se consideran como parte integrante del Patrimonio Nacional los derechos de patronato o de gobierno y administración sobre las fundaciones que se relacionan en este precepto, denominadas Reales Patronatos.

En el artículo 6.º se articula el régimen jurídico de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional y la aplicación de las normas de la Ley de Patrimonio del Estado con carácter supletorio, y en su caso, de la legislación sobre el Patrimonio Histórico-Artístico Nacional.

Igualmente se reafirman los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes y derechos integrados en el Patrimonio Nacional, su inscripción en el Registro como de titularidad estatal y la posible aplicación, en su caso, de las prerrogativas de recuperación, investigación y deslinde que corresponden al Estado a través del Ministerio de Hacienda respecto de los bienes de dominio público.

En relación con el artículo 8.º se estruc-

turan los órganos de gobierno del Patrimonio Nacional, precisando su composición y procedimiento de designación y preceptuando la concurrencia en dos de sus vocales de la condición de miembro de Ayuntamiento en cuyo término municipal radiquen bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Nacional o en alguna de las fundaciones gobernadas por su Consejo de Administración.

En relación con el artículo 9.º se establece el principio de sujeción de la contabilidad del Patrimonio Nacional a las normas aplicables a los organismos autónomos de carácter administrativo y el ingreso en el tesoro público de los frutos, rentas, percepciones o rendimientos de cualquier naturaleza producidos por los bienes que lo integran.

En relación con el artículo 10 se precisa que la situación administrativa de los funcionarios que presten sus servicios en el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

En la Disposición transitoria segunda se dispone la integración en el Patrimonio del Estado de los bienes anteriormente afectados al Patrimonio Nacional no incluidos en la relación formulada en el artículo 4.º, salvo el caso de los montes cuya titularidad quedará transferida al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Se articula también un procedimiento en orden a la ulterior afectación de los expresados bienes de acuerdo con su naturaleza y previa consulta con los Ayuntamientos en cuyo término radiquen aquéllos y, en su caso, a la Diputación Provincial o Comunidad Autónoma o Ente Preautonómico correspondiente.

Igualmente en la Disposición adicional única se establece la composición y funciones de la comisión de expertos que emitirá dictamen sobre el inventario de bienes a que se refiere el artículo 4.º

Palacio del Congreso de los Diputados,
27 de abril de 1982.

ANEXO AL INFORME DEL PROYECTO DE LEY DEL PATRIMONIO NACIONAL

Artículo 1.º

El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional se configura como una Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, orgánicamente dependiente de la Presidencia del Gobierno y excluida de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.

Son sus fines la gestión y administración de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional.

Artículo 2.º

Tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen.

Además se integran en el citado Patrimonio los derechos y cargas de Patronato sobre las Fundaciones y Reales Patronatos a que se refiere la presente ley.

Artículo 3.º

En cuanto sea compatible con la afectación de los bienes del Patrimonio Nacional, a la que se refiere el artículo anterior, el Consejo de Administración adoptará las medidas conducentes al uso de los mismos con fines culturales, científicos y docentes. Asimismo, velará por la protección del ambiente y por el cumplimiento de las exigencias ecológicas en los terrenos que gestione y, especialmente, en el Monte de El Pardo.

Artículo 4.º

Integran el Patrimonio Nacional los siguientes bienes:

1. El Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro.

2. El Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador, con sus jardines y edificios anexos.

3. El Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial, el Palacete denominado la Casita del Príncipe, con su huerta y terrenos de labor, y la llamada "Casita de Arriba", con las Casas de Oficios de la Reina y de los Infantes.

4. Los Palacios Reales de la Granja y de Riofrío y sus terrenos anexos.

5. El Monte de El Pardo y el Palacio de El Pardo, con la Casita del Príncipe. El Palacio Real de la Zarzuela y el predio denominado "La Quinta", con su Palacio y edificaciones anexas; la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, el Convento de Cristo y edificios contiguos.

6. El Palacio de la Almudaina con sus jardines, sito en Palma de Mallorca.

7. Los bienes muebles de titularidad estatal, contenidos en los Reales Palacios o depositados en otros inmuebles de propiedad pública, enunciados en el inventario que se custodia por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

8. Las donaciones hechas al Estado a través del Rey y los demás bienes y derechos que se afecten al uso y servicio de la Corona.

Para la exacta delimitación de los bienes enumerados en los seis primeros apartados de este artículo, se atenderá al perímetro fijado por los correspondientes Decretos de declaración de conjunto histórico-artístico. En su defecto, se seguirá el criterio de preservar la unidad del conjunto monumental.

A los efectos de esta ley se entiende por "Monte de El Pardo" la superficie de terreno que, bajo este nombre, aparece descrita en los planos del Instituto Geográfico y Catastral.

Artículo 5.º

Forman parte del Patrimonio Nacional los derechos de patronato o de gobierno y administración sobre las siguientes Fundaciones, denominadas Reales Patronatos.

1. La Iglesia y Convento de la Encarnación.
2. La Iglesia y Hospital del Buen Suceso.
3. El Convento de las Descalzas Reales.
4. La Real Basílica de Atocha.
5. La Iglesia y Colegio de Santa Isabel.
6. La Iglesia y Colegio de Loreto, en Madrid, donde también radican los citados en los apartados precedentes.
7. El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, sito en dicha localidad.
8. El Monasterio de Las Huelgas, en Burgos.
9. El Hospital del Rey, sito en dicha capital.
10. El Convento de Santa Clara, en Tor-desillas.
11. El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
12. El Copatronato del Colegio de Doncellas Nobles, en Toledo.

Artículo 6.º

1. Esta Ley y el Reglamento que se dicte para su ejecución regulan el régimen jurídico de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional. Se aplicará, con carácter supletorio, la Ley del Patrimonio del Estado.

2. Los bienes y derechos integrados en el Patrimonio Nacional serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, gozarán del mismo régimen de exenciones tributarias que los bienes de dominio público del Estado, y deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad como de titularidad estatal.

El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional podrá interesar del Ministerio de Hacienda, en relación con los bienes y derechos a que se refieren los dos artículos precedentes, el ejercicio de las prerrogativas de recuperación, investigación y deslinde que corresponden al Estado respecto de los bienes de dominio público.

3. A los bienes que tengan valor o carácter histórico-artístico les será también de aplicación la legislación sobre patrimonio histórico-artístico nacional.

Artículo 7.º

1. El contenido de los derechos de Patronato a que se refiere el artículo 5.º será el determinado en sus cláusulas fundacionales y, en caso de insuficiencia de las mismas, comprenderá con toda amplitud las facultades de administración de las Fundaciones respectivas. El Protectorado sobre dichas Fundaciones corresponde al Rey con las facultades que le atribuyen las disposiciones vigentes.

2. Los bienes de estas Fundaciones, destinados al cumplimiento directo de sus respectivos fines, gozarán de las mismas exenciones fiscales que los del dominio público del Estado.

Artículo 8.º

1. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará constituido por su Presidente, el Gerente y por un número de vocales no superior a diez, todos ellos profesionales de reconocido prestigio. En dos de los diez vocales habrá de concurrir la condición de miembros del Ayuntamiento en cuyo término municipal radiquen bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Nacional o en alguna de las Fundaciones gobernadas por su Consejo de Administración.

El Presidente, el Gerente y los demás miembros del Consejo de Administración serán nombrados mediante Real Decreto, previa deliberación del Consejo de Ministros, a propuesta y con el refrendo del Presidente del Gobierno.

2. Corresponde al Consejo de Administración:

a) La conservación, defensa y mejora de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional.

b) El ejercicio de los actos de administración ordinaria que sean necesarios para la adecuada utilización de los bienes.

c) La Jefatura del personal, tanto funcionarios como contratados en régimen laboral.

d) Dictar las normas necesarias para la organización y funcionamiento de las dis-

tintas dependencias, así como dirigir e inspeccionar éstas.

e) Contratar, en régimen de Derecho privado, las obras y suministros que sean de interés para el Patrimonio Nacional, previas las formalidades que se determinen en el Reglamento de esta Ley, así como cualesquiera otros contratos que se refieran al aprovechamiento de los bienes del mismo.

f) La constitución con fines exclusivamente culturales o para el decoro de edificios públicos y por un período máximo de dos años de depósitos de bienes muebles de valor o carácter histórico o artístico, adoptando las medidas necesarias para la adecuada seguridad y conservación de los mismos. En todo caso, se velará por el íntegro mantenimiento de las colecciones.

g) La promoción y el cumplimiento de los fines de carácter científico, cultural y docente a que se refiere el artículo 3.º

h) Ejercer la administración de los Reales Patronatos a que se refiere el artículo 5.º

i) La formación del inventario de bienes y derechos del Patrimonio Nacional, con intervención de los órganos de la Administración del Estado que reglamentariamente se determine, su elevación al Gobierno y la correspondiente propuesta al mismo para su rectificación anual.

j) La propuesta al Gobierno de afectación de bienes muebles e inmuebles al uso y servicio de la Corona.

k) La propuesta al Gobierno de desafectación de bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Nacional, cuando éstos hubiesen dejado de cumplir sus finalidades primordiales. En ningún caso podrán desafectarse los bienes muebles o inmuebles de valor histórico-artístico.

l) Aceptar donaciones, herencias o legados y, en general, acordar las adquisiciones a título lucrativo de cualquier clase de bienes. La aceptación de herencias se entenderá hecha a beneficio de inventario.

m) Elaborar y aprobar con carácter anual el Anteproyecto de presupuesto del Patrimonio Nacional y remitirlo al Gobierno para su posterior inclusión en los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 9.º

1. En el Estado letra A) de los Presupuestos Generales del Estado se incluirá, en la sección correspondiente, la dotación en la que figurarán los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones del Patrimonio Nacional.

2. Asimismo, excepcionalmente, se aplicarán al Patrimonio Nacional, los créditos presupuestarios que figuran en las secciones correspondientes de los distintos Ministerios, cuando éstos los destinen a la realización de actividades propias de su competencia que guarden relación con bienes del Patrimonio Nacional.

3. Los frutos, rentas, percepciones o rendimientos de cualquier naturaleza producidos por los bienes que integran el Patrimonio Nacional, se ingresarán en el Tesoro Público.

4. Con objeto de ordenar la gestión económica del Patrimonio Nacional, se formará para cada ejercicio un presupuesto conforme a lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

5. La contabilidad del Patrimonio Nacional se ajustará a las normas aplicables a los Organismos Autónomos de carácter administrativo.

6. El Presidente y, por delegación el Gerente, tendrán la facultad de disponer gastos y ordenar los pagos correspondientes.

7. La intervención y fiscalización de los actos de reconocimiento y liquidación de los derechos y obligaciones estarán a cargo de la Intervención General del Estado por medio de un Interventor Delegado.

8. El examen y censura de las Cuentas del Patrimonio Nacional corresponden al Tribunal de Cuentas.

Artículo 10

El personal al servicio del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará integrado por funcionarios de las diversas administraciones públicas y por trabajadores contratados con arreglo a la legislación laboral.

Los funcionarios que presten sus servicios en el Consejo de Administración del

Patrimonio Nacional, quedarán en la situación administrativa que les corresponda de acuerdo con las normas aplicables a su Cuerpo de procedencia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

El Gobierno, previo informe del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, dictará en el plazo de un año el Reglamento general para desarrollo y ejecución de esta ley en el cual deberá regularse el régimen de visita a los inmuebles del Patrimonio y de los Reales Patronatos, con criterios análogos a los de la legislación sobre monumentos histórico-artísticos.

Segunda

A los efectos prevenidos en la Disposición transitoria segunda, se entenderán excluidos del perímetro del Monte de El Pardo los terrenos que a la entrada en vigor de esta Ley, se encuentren arrendados o cedidos a cualesquiera entidades, cuya relación se establecerá reglamentariamente.

Tercera

1. Las funciones atribuidas al Jefe del Estado por el Decreto-ley de 23 de agosto de 1957 en el Patronato de la Fundación que constituye, se entenderán, referidas al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

2. El Gobierno constituirá una Comisión en la que estarán representadas las entidades titulares de relaciones jurídicas con la Fundación creada por el Decreto-ley de 23 de agosto de 1957. Dicha Comisión deberá elaborar y elevar al Gobierno una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio de la Fundación y sobre las situaciones jurídicas derivadas del mencionado Decreto-ley.

3. Se autoriza al Gobierno para, mediante Real Decreto, regular las materias

objeto del Decreto-ley de 23 de agosto de 1957 con las finalidades siguientes:

a) Adecuar la Fundación a los preceptos de esta Ley y establecer el nuevo régimen jurídico de sus bienes, disponiendo, cuando proceda, su integración en el Patrimonio del Estado.

b) Proveer, especialmente, al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas.

c) Proceder, en lo demás, a resolver o novar en los términos que correspondan las relaciones y situaciones jurídicas a las que se refiere el número anterior.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

A la entrada en vigor de esta ley cesará en sus funciones el actual Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, debiendo procederse inmediatamente al nombramiento del nuevo Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.

Segunda

Los bienes afectados al Patrimonio Nacional con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley no incluidos en la relación del artículo 4.º se integrarán en el Patrimonio del Estado, salvo en el caso de los montes, cuya titularidad quedará transferida al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.

El Gobierno, en el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, adoptará las decisiones oportunas en orden a la ulterior afectación de los expresados bienes, de acuerdo con su naturaleza, y previa consulta con los Ayuntamientos en cuyo término radiquen aquéllos. En el caso en que el perímetro de los bienes abarque más de un término municipal, la consulta se formulará a la Diputación Provincial o, en su caso, a la Comunidad Autónoma o Ente Preautonómico.

Disposición adicional única

A la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno, mediante Real Decreto, constituirá una Comisión de tres expertos que, en el plazo de seis meses, emitirá dictamen sobre el inventario de bienes a que se refiere el artículo 4.º, 8. Uno de sus miembros será el Interventor General del Estado o funcionario en quien delegue; el otro será propuesto por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el terce-

ro será el Director General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas o funcionario en quien delegue.

El dictamen se someterá al Gobierno, quien lo remitirá a las Cortes Generales.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas la Ley de 7 de marzo de 1940 y cuantas otras disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Imprime RIVADENEYRA, S. A.-MADRID

Cuesta de San Vicente, 28 y 36

Teléfono 247-23-00, Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.580 - 1961